

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL

Fecha de Clasificación:	09 de octubre de 2024.
Unidad Administrativa:	Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos.
Confidencial:	Los nombres y firmas de las partes intervinientes en el juicio, así como, los datos de inscripción de los inmuebles que obran en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Abraham González, contenidos en el expediente número 377/2014, de índice del juzgado en mención.
Fundamento Legal:	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Folio de Acuerdo:	CT/UT/PJECH/AC/17-2024.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

De conformidad con lo establecido por los artículos 109, 111, 112, 117, 120, 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua (en adelante La Ley); numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas (en adelante Los Lineamientos), se emite el presente **ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LA REFERENTE A LOS NOMBRES Y FIRMAS DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL JUICIO, ASÍ COMO, LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES QUE OBRAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL ABRAHAM GONZÁLEZ, CONTENIDOS EN EL ESCRITO PRESENTADO EL DOS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, Y EN EL ACUERDO QUE RECAYÓ A ÉSTE, EN FECHA CINCO DE MARZO DE ESE MISMO AÑO, Y PUBLICADO AL DÍA SIGUIENTE, CONSTANCIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE**

**NÚMERO 377/2014, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIEMRO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS**, conforme a los siguientes:

### **ANTECEDENTES:**

**I. Solicitud de Información.** Se recibió la solicitud registrada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la que le fue asignado el folio número **080144524000407**, con la que pidió lo siguiente:

*“De la forma más respetuosa, solicito su auxilio y disposición, a fin de que, por este medio, me sea expedido en su versión pública, el escrito y anexos presentados en fecha 06 de marzo de 2015, dentro del expediente 377/14, del Juzgado Primero Civil tradicional, del distrito Judicial Morelos, así como el acuerdo recaído al mismo.*

*Por último, también solcito la última sentencia interlocutoria emitida en relación a las costas, y en cumplimiento a los recursos y/o juicios de amparo interpuestos en contra de dicha interlocutoria, es decir, la definitiva.”*

**II. Requerimiento de información al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos.** A través del oficio identificado con el número UT-802/2024, el Titular de la Unidad de Transparencia solicitó al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos, diera respuesta dentro del plazo de tres días hábiles computados a partir de que recibiera el aludido oficio, sobre los planteamientos requeridos y, en su caso, indicara si la información requerida encuadraba en alguna de las hipótesis establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua para ser considerada como reservada, confidencial o inexistente.

**III. Solicitud de clasificación de la información.** En atención a lo anterior, el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos, envió el oficio identificado con el número 1047/2024, con el que indicó:

*“...se considera como información pública, lo referente al escrito y anexos que fueron presentados en este Juzgado el dos de marzo de dos mil quince y el acuerdo que le recayó a éste, con fecha cinco de marzo de ese mes y año y publicado al día siguiente... sométase a consideración del comité de transparencia... de acuerdo a lo que establece el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.”*

### **CONSIDERANDOS:**

**I.** Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, así como la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 4, fracción II, establecen que toda persona tiene derecho a acceder a la información pública, salvo en aquellos casos establecidos en la ley.

El derecho de protección de datos personales encuentra su fundamento constitucional en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 4<sup>1</sup>, en el que se establece además que la Ley protegerá a las personas de cualquier lesión en sus derechos por el tratamiento de datos personales, el cual indica:

Del contenido de los preceptos en cita se desprende que toda persona tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a la difusión de sus datos personales, así como al derecho de protección de los mismos, que deberá garantizarse por todas las autoridades del Estado mexicano en términos de lo dispuesto por el artículo 1º Constitucional.

De conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XI de la Ley, son datos personales aquellos que contengan información de cualquier tipo concerniente a personas identificadas o identificables.

**II. Los Sujetos Obligados** conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Ley, serán responsables de los datos personales en su poder y cumplirán con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua; no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en sus sistemas de información, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, de acuerdo a la normatividad aplicable.

**III. Que el artículo 128 de la Ley en mención, establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, y que ésta no se sujetará a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.**

---

<sup>1</sup> ARTICULO 4 (...)

Para proteger sus datos, toda persona tiene el derecho a acceder a información sobre sí misma o sus bienes asentada en archivos, bases de datos o registros públicos o privados y tiene el derecho a actualizar, rectificar, suprimir o mantener en reserva dicha información, en los términos de la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

(...) La ley protegerá a las personas contra cualquier lesión en sus derechos, resultante del tratamiento de sus datos personales. (...)"

**IV.** Que según lo previsto por el artículo 32, fracción II, de la Ley, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua es sujeto obligado, quedando incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos y dependencias del mismo.

**V.** Que en concordancia a lo anterior, el artículo 33 de la Ley en mención, en su fracción XII, ordena a los entes públicos que sean Sujetos Obligados de la Ley, establecer las medidas necesarias para la protección de sus archivos y sistemas de archivo, evitando el acceso no autorizado a aquellos que no sean de libre acceso, encontrándose dentro de tal supuesto la información que el artículo 5 de dicha Ley, en sus fracciones XVII y XX, define como información confidencial y reservada, respectivamente.

**VI.** Que con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación señalada en el considerando anterior, de acuerdo a lo previsto por los artículos 5 fracción V, 35 y 36 fracción III, de la Ley, en cada Sujeto Obligado se conformará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar a quien la Ley le atribuye la facultad de resolver en torno a la clasificación de información que realicen los titulares de áreas acorde a los criterios que al efecto expida el Sujeto Obligado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Para lo anterior, el Comité de Transparencia del Sujeto Obligados, según lo dispuesto por la fracción VI, del artículo 36, de la Ley, podrá acceder a la información del Sujeto Obligado para resolver sobre la clasificación realizada por los titulares de las áreas, conforme a la normatividad previamente establecida para tal efecto y para opinar sobre las formas sobre su resguardo o salvaguarda.

**VII.** Que el objeto del presente acuerdo resolver sobre la clasificación como confidencial de los datos personales contenidos en los recibos de nómina de los trabajadores de este Sujeto Obligado.

#### **FUNDAMENTACIÓN:**

El presente acuerdo encuentra su fundamento en lo establecido por los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 5, fracciones, XI, XII y XVII, 109, 111, 112, 120 y 128, de la Ley; artículo Quinto, fracción IX, de los Lineamientos para la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua; numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos.

### MOTIVACIÓN:

Según lo establecido por el primer párrafo del artículo 128 de la Ley, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

En el caso concreto, los datos personales contenidos en la información requerida en la solicitud entregada en la Unidad de Transparencia y registrada en la Plataforma Nacional correspondiéndole el folio **080144524000407**, son: **los nombres y firmas de las partes intervinientes en el juicio, así como, los datos de inscripción de los inmuebles que obran en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Abraham González, contenidos en el expediente número 377/2014, de índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos**, información que se encuentra bajo resguardo del Juzgado en mención y son considerados como información confidencial y por ende sensible, es por ello que dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial.

Se afirma lo anterior, toda vez que, de permitir el acceso a los mismos, se vulneraría el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de que goza toda persona y que deben garantizarse por todas las autoridades del Estado Mexicano.

Asimismo, es importante mencionar que el derecho de acceso a la información, en ningún modo es absoluto, y se encuentra sujeto a limitaciones y excepciones contempladas en las normas. En ese orden de ideas, es menester encontrar equilibrio entre el derecho de acceso a la información y los derechos humanos a la intimidad y protección de datos personales que poseen las personas cuyos datos personales se contienen los documentos de mérito.

Lo anterior encuentra sustento en los criterios contenidos en las tesis del rubro y texto siguientes:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo

que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que **por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados**. Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.<sup>2</sup>

**ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES.** Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la existencia de los mecanismos correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además, señala como regla general, el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". **Sin perjuicio de lo anterior, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación.** Por otra parte, si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". De lo anterior se advierte que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder y, contra la decisión que adopten, procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En consecuencia, la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligados, en tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la adecuada defensa de las partes".<sup>3</sup>

La clasificación de la información, protege el interés público de la facultad de la administración de justicia del Estado, así como los derechos a la protección de datos de las personas que intervengan en procesos de investigaciones de responsabilidades administrativas, estableciendo una limitación, legal, fundada y motivada a los derechos de los particulares, en éste caso a conocer, datos específicos que, de no protegerse por parte de los sujetos obligados, se vulnerarían derechos humanos de intimidad y protección de datos personales que poseen las personas, cuyos datos personales se encuentran en una resolución.

<sup>2</sup> Registro No. 191967, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Página: 74 Tesis: P. LX/2000, Tesis Aislada Materia(s): Constitucional.

<sup>3</sup> Época: Décima Época. Registro: 2011541 Instancia: Primer Tribunal Colegiado De Circuito En Materia Administrativa Especializado En Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 29, Tomo III, Abril de 2016, Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)



En este caso, al ser un documento que contiene partes o secciones confidenciales, se debe elaborar una versión pública, en la que se testen única y exclusivamente aquéllas confidenciales y sensibles.

#### TEST DE PROPORCIONALIDAD:

Como se explicó anteriormente, en esta fase de análisis examinaremos si en el caso concreto existe una justificación desde el punto de vista legal que permita identificar el beneficio del interés público obtenido con la divulgación de los datos clasificados como confidenciales, y si la medida de la clasificación supera sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Implica que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés público general de que se difunda, ajustándose a la limitación del derecho humano y sea al principio de proporcionalidad, ya que representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En el caso concreto, es necesario recordar que la medida que se analiza es la clasificación como confidencial de la información relativa a los datos personales, son datos concernientes al titular de los mismos.

También es importante recordar que toda persona podrá acceder a la información pública materia de la Ley, salvo en los casos de excepción<sup>4</sup>, que son cuando la información se encuentre clasificada como reservada o **confidencial**, en cuya aplicación e interpretación se debe aplicar el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, el que implica realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como **confidencial** o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa, es decir que esas restricciones se apliquen de manera excepcional y restringida, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas, tal y como lo establece el artículo primero segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Sexto de la Ley en relación con los artículos 6º<sup>5</sup> párrafo primero y 7º<sup>6</sup>.

Apoya lo anterior el criterio contenido en la tesis del rubro y texto siguientes:

**“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del artículo 6o. de la**

---

<sup>4</sup> ARTÍCULO 40. Toda persona por sí, o por medio de representante legal, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá acceder a la información materia de esta Ley, salvo los casos de excepción previstos en la misma.

<sup>5</sup> ARTÍCULO 6. El derecho de acceso a la información pública se interpretará, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, conforme a:

<sup>6</sup> ARTÍCULO 7. En la aplicación e interpretación de esta Ley y demás normatividad en la materia, se deberá atender a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información, y demás mencionados en esta Ley.

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.<sup>7</sup>*

*CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."*

En la aplicación de la prueba del interés público, haremos el examen de proporcionalidad que debe cumplir con los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en términos a lo establecido por el artículo 145 de la Ley.<sup>8</sup>

Precisado lo anterior, pasamos a la realización de la prueba de interés público a efecto de determinar si el beneficio de restringir el acceso a los datos personales es mayor que el daño que se puede generar en la persona que solicita la información, en cumplimiento a lo establecido por el Cuadragésimo noveno de los Lineamientos.

## 1. Idoneidad

En esta etapa del escrutinio debe analizarse si la legitimidad del derecho adoptado como preferente, es la adecuada para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación empírica entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Época: Décima Época Registro: 2002944 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: I.4o.A.40 A (10a.) Página: 1899

<sup>8</sup> ARTÍCULO 145. Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por:  
I. Idoneidad. La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido.  
II. Necesidad. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público.  
III. Proporcionalidad. El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

<sup>9</sup> SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Época: Décima Época Registro: 2013152 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCLXVIII/2016 (10a.) Página: 911



En el caso concreto debe determinarse si la clasificación como confidencial de la información solicitada constituye una medida idónea para proteger el derecho adoptado como preferente, que es el derecho a la Protección de Datos Personales.

En este sentido, es dable concluir que en el caso concreto la clasificación como confidencial de parte de los datos solicitados para la elaboración de una versión pública, es una medida idónea para proteger los datos confidenciales, pues al impedir su acceso se están protegiendo derechos humanos de las personas particulares que allí aparecen.

## 2. Necesidad

Una vez superado el examen de idoneidad, corresponde analizar si la clasificación como confidencial de la información es una medida necesaria para salvaguardar el interés social, cuestión de orden público o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que afecten en menor grado el derecho de acceso a la información.<sup>10</sup>

En este orden de ideas, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. El primer aspecto del test de necesidad es de gran complejidad, toda vez que supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad y afectación material de su objeto.

La clasificación como confidencial de la información que encuentra fundamento en los artículos citados en el apartado correspondiente de este acuerdo, no impiden a la parte solicitante acceder a los datos de su interés, de lo que se concluyó, que se trata de una medida idónea para alcanzar los fines perseguidos por la normatividad aplicable, que es la de proteger tales datos y actividades de investigación.

De un análisis minucioso de la normatividad aplicable en la materia, así como en la normatividad correspondiente a cada una de las Entidades Federativas del País, no se encontró una medida diversa para proteger dichos datos, con la única posibilidad de la elaboración de una versión pública en su caso, en la que se suprimirán tales datos por su clasificación.

Agotado dicho análisis, procedimos a la búsqueda de una medida alternativa que se pudiera encontrar en el derecho comparado, sin que se ubicara una medida

---

<sup>10</sup> TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Época: Décima  
Época Registro: 2013154 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCLXX/2016 (10a.) Página: 914

alterna a la clasificación como confidencial para su protección, ya que en la confronta de derechos, la elección de uno como lo sería el ejercicio del derecho de acceso a la información, implica la unificación del otro, pues nos encontramos en un caso de colisión en el que un derecho elimina a otro.

Así, es de concluirse que, ante la falta de un medio menos lesivo a la apertura de dichos datos para la satisfacción del interés público de su acceso, la medida de la clasificación como confidencial resulta necesaria.

Precisado lo anterior, corresponde ahora analizar si el beneficio del interés público de reservar la información, es mayor que el derecho del particular que solicita la información.

### 3. Proporcionalidad

En esta sección se realizará el examen de proporcionalidad para determinar el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, procurando que la determinación a que se arribe represente un mayor beneficio en relación al perjuicio que se podría causar a la población.

El examen de proporcionalidad consiste en realizar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados.

Si bien, las personas gobernadas gozan del derecho humano de acceso a la información y los entes públicos se encuentran obligados a promover, respetar, proteger y garantizar este derecho, no debe pasar desapercibido que los derechos humanos no son absolutos, es decir, que pueden válidamente ser restringidos o suspendidos en los casos en que la Constitución establezca, tal como sostiene la siguiente tesis:

**“DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.** Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos

*sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar **válidas las restricciones** o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).”<sup>11</sup>*

En ese sentido, como se ha venido sosteniendo, es legítimo que, para efectos de cumplir con las obligaciones generales en materia de Derechos Humanos, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando la protección de datos personales, se realice una versión pública para que el solicitante pueda acceder a la resolución en comento.

En el caso concreto, el resguardar la información que obra en los documentos, con el fin de proteger el interés personal de quienes se verían afectados en caso de divulgarse sus datos personales, así como un interés general, el de que a la sociedad le interesa que las autoridades actúen dentro del marco de un Estado Constitucional de Derecho.

**PERIODO POR EL CUAL SE RESERVA LA INFORMACIÓN.** - De conformidad con el segundo párrafo del artículo 128 de la Ley y el último párrafo del artículo Trigésimo Octavo de los Lineamientos, **la información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna** y sólo sus titulares, representantes y personas servidoras públicas en términos de la legislación aplicable podrán acceder a ella.

Por lo antes expuesto y fundado, se dictan los siguientes:

#### ACUERDOS:

**PRIMERO.- Se clasificación como Información Confidencial,** los datos personales: los nombres y firmas de las partes intervinientes en el juicio, así como, los datos de inscripción de los inmuebles que obran en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Abraham González, contenidos en el escrito presentado el dos de marzo de dos mil quince, y en el acuerdo que recayó a éste, en fecha cinco de marzo de ese mismo año, y publicado al día siguiente; constancias que se encuentran dentro del expediente número 377/2014, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos; con fundamento en lo señalado por los artículos 109, 111, 112, 117, 120 y 128, de la Ley; numerales

---

<sup>11</sup> Época: Décima Época, Registro: 2003975, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXV/2013 (10a.), Página: 557

Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Octavo de los Lineamientos.

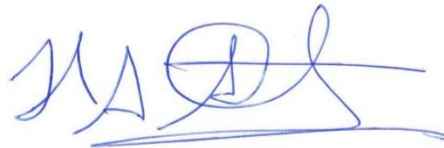
**SEGUNDO.-** Serán autoridades responsables de la conservación de la información clasificada como confidencial en el presente acuerdo, todas las personas servidoras públicas adscritas al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Morelos.

Notifíquese e instrúyase a la Unidad de Transparencia para que de inmediato dé cumplimiento a esta determinación.

Así, por unanimidad, lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, integrado por la licenciada Ana Gabriela Holguín Castruita, el licenciado Julio César Santacruz Favela y el licenciado Paúl Daniel Moriel Quiralte.



**LICENCIADA ANA GABRIELA HOLGUÍN CASTRUITA,  
PRESIDENTA DEL COMITÉ.**



**LICENCIADO JULIO CÉSAR SANTACRUZ FAVELA,  
SECRETARIO DEL COMITÉ.**



**LICENCIADO PAÚL DANIEL MORIEL QUIRALTE,  
VOCAL DEL COMITÉ.**